

Vocación social: universidades y movilidad en el Biobío

Roger Sepúlveda Carrasco
Rector Universidad Santo Tomás
Región del Biobío.



La movilidad social no es una consigna. En la Región del Biobío tiene un rostro concreto: el del estudiante que se convierte en el primer profesional de su familia. Detrás de cada titulado y titulada hay una trayectoria que modifica ingresos futuros, capital cultural y expectativas intergeneracionales. Esa es la dimensión estructural de la educación superior regional.

El Biobío concentra más de 130.000 estudiantes en educación superior, cerca del 10% de la matrícula nacional, siendo el principal polo universitario fuera de Santiago. Esta masa crítica no solo dinamiza servicios y empleo; configura un ecosistema que incide en innovación, emprendimiento y cohesión territorial. La educación superior es hoy infraestructura estratégica del desarrollo regional.

Desde esa perspectiva, el debate sobre financiamiento no puede reducirse a una discusión arancelaria. La política de gratuidad ha permitido que jóvenes pertenecientes al 60% de los hogares de menores ingresos accedan a la educación superior en proporciones históricas. En regiones con alta presencia de primera generación universitaria, su efecto redistributivo ha sido evidente.

Sin embargo, el acceso no agota el desafío. En el Biobío, la retención de primer año bordea en promedio el 75%, cifra que mejora significativamente cuando existen programas sistemáticos de acompañamiento académico y psicoeducativo. La titulación oportuna, en cambio, sigue siendo un nudo crítico a nivel nacional, especialmente en contextos de mayor vulnerabilidad. Si el sistema no asegura trayectorias completas, la

promesa de movilidad pierde consistencia.

La empleabilidad confirma la relevancia del esfuerzo. En la región, más del 80% de los titulados logra insertarse laboralmente durante el primer año, particularmente en áreas técnicas y profesionales vinculadas a servicios, salud y sector productivo. Cada egresado que se inserta y permanece en el territorio fortalece el tejido económico local y amplía la base tributaria y productiva regional.

Aquí emerge una tensión que debe ser abordada con seriedad en el diseño de políticas públicas. Si el financiamiento reconoce únicamente el arancel regulado, pero no incorpora adecuadamente los costos asociados al acompañamiento integral de estudiantes vulnerables, se genera un desajuste estructural para instituciones con fuerte vocación social. La equidad no se garantiza solo con acceso gratuito; requiere financiamiento sostenible que permita asegurar calidad, permanencia y resultados.

El desarrollo del Biobío no dependerá únicamente de grandes inversiones o ciclos favorables. Dependerá de su capacidad para formar capital humano avanzado, retener talento y sostener trayectorias educativas exitosas.

La vocación social universitaria no es retórica. Es una decisión institucional y también política: asumir que la educación superior es el principal mecanismo de cohesión y movilidad territorial. Cuando una región invierte con responsabilidad en su capital humano, no solo mejora indicadores; construye futuro. Y el futuro del Biobío se juega, en buena medida, en la solidez y sostenibilidad de sus universidades, institutos y centros de formación técnica.